

La lucha por la tierra en Brasil: elementos de una problemática

Edemar Joao Buzanello

Nuestro objetivo al analizar el problema de la tierra en Brasil se fundamenta en cuatro cuestiones centrales, a saber: a) apuntar a las principales causas del conflicto por la tierra en los últimos años; b) caracterizar la naturaleza, dimensión y regionalización del conflicto agrario; c) señalar los principales avances de la derecha en el campo, principalmente, a partir del derrocamiento del régimen militar; y finalmente d) apuntar algunas perspectivas para los próximos años respecto de la cuestión de la tierra.

a) Estructura agraria brasileña: orígenes y formación histórica

La tierra es el medio de producción fundamental en la agricultura y no puede ser reproducida al libre arbitrio de los hombres, ni tampoco multiplicada como una máquina o como los demás instrumentos de trabajo. Por esto, la forma histórica que reviste la apropiación y distribución de la tierra asume una importancia significativa, puesto que definirá, en gran medida, el proceso productivo que en ella se desarrolle.

El derecho agrario brasileño legitimó históricamente la desocupación y especulación de la tierra, la cual se constituye desde hace muchos años en una mercancía como cualquier otra, que pasa a ser instrumento de compra y venta en el mercado.

Durante más de un siglo la estructura agraria brasileña se mantiene prácticamente intacta: concentrada, privada, desocupada, y fundamentalmente, como importante instrumento de especulación.

A partir de la segunda mitad de los años cincuenta y principalmente en los primeros años de la década de los sesenta —como consecuencia del agravamiento del problema de la tierra— observamos en Brasil una fuerte movilización campesina (*Ligas Camponesas en el Noreste y Movimento dos trabalhadores Sem Terra - MASTER en Río Grande del Sur*) que demanda la aplicación de la reforma agraria, interrumpida violentamente por el golpe de Estado de abril de 1964. Como es sabido, un significativo número de importantes líderes, grandes propietarios y asociaciones rurales, participaron directamente en el golpe militar, bajo el liderazgo del general Golbery do Couto e Silva y la coordinación del *Instituto de Pesquisas Economicas e Sociais (IPES)* y del *Instituto Brasileiro de Acao Democratica (IBAD)*.

Así pues, se implanta el régimen militar con fuerte apoyo de los sectores dominantes agrarios, los cuales aseguraron y ampliaron sus privilegios sobre la tierra gracias a los diferentes mecanismos de control y violencia utilizados en el campo.

No obstante los avances registrados en la legislación (*Estatuto da Terra* de 1964), los sucesivos gobiernos militares se mantuvieron fieles a los compromisos asumidos con los intereses dominantes agrarios, en el sentido de impedir, a toda costa, la modificación de la actual estructura agraria. En efecto, el régimen militar tuvo una base bastante sólida en el campo, donde tanto latifundistas como empresarios agropecuarios y agroindustriales, nacionales o extranjeros, representaron una importante fuerza en el bloque del poder.

A partir de 1964 el régimen militar altera significativamente las bases institucionales de mediación y ejecución de políticas hasta entonces existentes en la agricultura. Se crea en su lugar una base institucional representada por varias agencias ligadas directamente al poder central, con el objetivo de agilizar las decisiones y obtener una rápida respu-



ta del sector agropecuario, en función de las determinaciones exportadoras del nuevo modelo económico.¹

En verdad, el régimen militar centralizó y militarizó la política de tierras del país, con el fin fundamental de agilizar el proceso de mercantilización de las tierras de la Amazonia al gran capital monopolista, en detrimento de los legítimos derechos de los campesinos que en ellas habitaban. El modelo de modernización adoptado en Brasil durante los últimos años, al mismo tiempo que multiplicó la producción y productividad de determinados productos, concentró aún más la propiedad de la tierra expropiando a millares de campesinos. Esta modernización fue, en primer lugar, conservadora, puesto que no alteró la tradicional estructura agraria; en segundo lugar, fue desigual y selectiva, porque se concentró básicamente en el centro sur del país, volcándose fundamentalmente en determinados productos de elevado valor comercial y destinados a la exportación, o en forma de materia prima para el procesamiento agroindustrial; en tercer lugar, fue dependiente de la intervención del Estado que, a través de sus políticas de incentivos y subsidios principalmente en relación al crédito, transfirió enormes recursos públicos a determinados agentes del sector privado.²

La tierra en Brasil está fuertemente monopolizada en pocas manos, y presenta índices de concentración considerados como los más elevados del mundo. Así en 1985, según el *Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística IBGE*, el 53% de los establecimientos rurales tenía menos de 10 hectáreas, lo que representaba solamente el 2.6% del área. En cambio, las propiedades mayores de 100 hectáreas que representaban tan sólo el 9.7% del conjunto de las propiedades ocupaban en este mismo año casi el 80% del área total. Si por otro lado, consideramos solamente las propiedades mayores de 1000 hectáreas, verificaremos que éstas monopolizan el 43.77% del total de la tierra, y representan tan sólo el 0.85% del conjunto de las propiedades brasileñas.

Según informaciones del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), en 1987 el área registrada en manos de particulares, en Brasil, alcanzó a 612 millones de hectáreas, de las cuales, 420 millones estaban en poder de los latifundistas, con alrededor de 165 millones de hectáreas de tierras ociosas. Por otra parte, el Estado

detenta alrededor de 112 millones de hectáreas, de las cuales la gran mayoría se concentra en la región amazónica, de difícil acceso y de precaria infraestructura. De 1972 a la fecha, según esta misma fuente, el latifundio aumentó en 132 millones de hectáreas, lo que representó, innegablemente, la mayor reforma agraria del mundo, solamente que en sentido contrario. La concentración de la propiedad de tierras en Brasil es casi absoluta; alcanza proporciones tales que tan sólo 519 latifundistas controlan un área de 61 millones de hectáreas, y superan en 10 millones el total del área ocupada por 2.9 millones de propietarios minifundistas.

El gran capital, ya sea nacional o extranjero, financiero o industrial, comercial o agrario, individual o asociado, se apropia con fines especulativos de las tierras en Brasil. En verdad, la política de la tierra durante los últimos años se ha orientado hacia la manutención del latifundio en las regiones antiguas y a su reproducción en áreas de frontera agropecuaria.

Hoy la propiedad se encuentra fuertemente vinculada a los intereses del gran capital. Como ejemplo de ello se puede destacar que, entre las 10 mayores empresas privadas nacionales, seis son también grandes propietarias de tierras,³ y en conjunto, los 27 mayores propietarios nacionales, detentan más de 25 millones de hectáreas, la mayor parte bajo la forma de sociedades. Ahora bien, las tierras nacionales no son de propiedad exclusiva de los empresarios y ciudadanos brasileños, ya que existe una significativa participación del capital extranjero en la apropiación directa de ellas. En ese sentido, según el *Relatorio Veloso* de 1976, las empresas extranjeras eran propietarias de más de 20 millones de hectáreas de tierras, localizadas principalmente en la Amazonia. Destacan en ese sentido empresas estadounidenses tales como, Stanley Bros. Real State Co., con 1345 mil hectáreas en el estado de Goiás y Georgia Pacific-Rockefeller Morgan G., con 800 mil hectáreas en el estado de Pará; Volkswagen/Mercedez Benz de Alemania, con 700 mil hectáreas, en los estados de Pará y Mato Grosso; Li-quitfarm de Italia, con 670 mil hectáreas, en el estado de Mato Grosso; Georgia Pacific Robin Holie Mc. Glohn, con 600 mil hectáreas en el estado de Pará y Universal Overseas Holding con 503 mil hectáreas en el estado de Goiás, ambas de Estados Unidos y Toyo Menka de Japón con 500 mil hectáreas en los estados de Pará y Amazonas.

En efecto, para la gran mayoría de las empresas, las tierras no son tierras de trabajo y tampoco tienen un valor de uso, sino más bien representan una reserva de capital en espera de su valorización en el futuro.

¹ Son notables al respecto la EMBRAPA y la EMBRATER, empresas dedicadas respectivamente a la producción y extensión del conocimiento agropecuario, que sumados con los financiamientos públicos subsidiados, modificaron profundamente la base técnica de los productos exportables.

² Cfr., para mayores detalles a José Graziado da Silva, *A modernização Dolorosa*, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1977.

³ Cfr., material de campaña -LULA 89, sobre la cuestión agraria.

Como consecuencia del proceso de modernización y concentración de la propiedad de las tierras en el país, se puede señalar que, mientras millares de campesinos se proletarianizan y, en gran parte, son expulsados hacia las grandes ciudades (28 millones de 1960 a 1980), el gran capital, asociado económica y políticamente, triunfa soberano, disponiendo libre e impunemente de la agricultura brasileña, comandando y controlando, tanto el proceso económico como los procesos sociopolíticos agrarios.

Familias sin tierra en Brasil-1989

Categorías	Número de familias
<i>Posseiros</i> (ocupantes sin el título jurídico de la tierra)	540 000
<i>Parceros</i> (pagan renta al dueño en producto o días de trabajo)	300 000
<i>Arrendatarios</i> (pagan renta en dinero o producto)	550 000
<i>Micropropietarios</i> (poseen menos de cinco hectáreas)	750 000
<i>Semipropietarios</i> (complementan sus ingresos como asalariados temporales)	2 700 000
TOTAL DE FAMILIAS SIN TIERRA	4 840 000

FUENTE: *Sinopse de dados socioeconomicos do Brasil. Movimento dos Trabalhadores Sem Terra*, junio de 1989.

De ahí resulta una enorme tensión social, que alcanza dimensiones graves de violencia, principalmente durante los últimos años. La realidad agraria brasileña es explosiva y asume características de una verdadera guerra. De un lado, están los campesinos que reivindican sus legítimos derechos de acceso a la tierra como medio de trabajo y de vida y de otro, está el capital agrario, industrial, comercial y financiero que, de forma unida, se organiza y actúa política y militarmente para defender y garantizar sus intereses y privilegios en la agricultura.

b) La lucha por la tierra y la ofensiva de la derecha en el campo

La lucha por la tierra en Brasil, país con más de 8 millones de km² y con enormes áreas desocupadas, tiene sus fundamentos, por cierto, en la concentración y excluyente estructura agraria, de tal suerte que se puede afirmar que es un país en que "hay mucha tierra sin gente y mucha gente sin tierra".

El hecho de que existan en el país casi 5 millones de familias sin tierra, y alcancen a más de 18 millones de trabajadores excluidos de su medio fundamental de trabajo y de vida, representa innegablemente una de las más brutales injusticias sociales señaladas.

La violencia en el campo sigue aumentando, siempre selectiva e impune. El fin de la dictadura militar y el inicio de un gobierno civil en Brasil no significó, por más paradójico que parezca, una tregua para los trabajadores, ni tampoco una disminución de la violencia en el campo. Al contrario, el número de asesinatos y de familias involucradas en conflictos por la tierra ha aumentado considerablemente.

Conflictos por la tierra en Brasil

Año	Número de conflictos	Personas involucradas	Asesinatos
1983	315	38 000*	48
1984	484	67 788*	116
1985	636	405 000	125
1986	634	594 448	105
1987	582	667 177	109
1988	621	403 733	93

FUENTE: *Comissão Pastoral da Terra, Conflitos no Campo brasileiro/1988*. * Núm. de familias.

La propuesta de reforma agraria anunciada por Sarney en 1985, preveía dar tierra a 900 mil familias en un conjunto de 27.6 millones de hectáreas. A finales de 1988, apenas 40 mil familias fueron asentadas, lo que representaba, por lo tanto, tan sólo el 4.4% de las metas propuestas. Si consideramos que el 80% de las nuevas propiedades fueron en los estados de frontera agropecuaria; que en muchos casos, se configuró apenas una regularización de la ocupación anterior, además de la expropiación de más de 100 mil pequeñas propiedades —principalmente en el sur del país— podemos concluir que el gobierno "civil" de la "Nueva República", comandada por Sarney, practicó una verdadera contrarreforma agraria.

En cuatro años de gobierno, fueron asesinados 432 trabajadores en el campo por problemas de tierras, y fueron rarísimos los casos averiguados por la justicia y los responsables castigados.

Los conflictos por la tierra en Brasil son tratados, en general, por los medios de comunicación masiva, como casos policíacos, según los cuales la paz en el campo depende de una efectiva acción

de desarme y no una cuestión política que conlleve profundos e inmediatos cambios en la estructura agraria. Así pues, se desconoce la verdadera guerra que se trava en el campo. En los periódicos de circulación nacional, raramente se divulga la violencia practicada en contra de los trabajadores rurales. En cambio, se destaca las noticias de ocupaciones de tierras por parte de los trabajadores, siempre tratadas como invasiones que agreden el derecho "legítimo" de propiedad.⁴

Sobre la cuestión de la violencia agraria en Brasil, podemos señalar cuatro aspectos recurrentes que predominan en esa guerra silenciosa en el campo: se trata de muertes selectivas, impunes, con predominancia en la frontera agropecuaria del país —más particularmente en la Amazonia— y asumen un carácter paramilitar y organizado.

Con relación a su carácter selectivo, se puede afirmar que las muertes llevadas a cabo por conflictos de tierras alcanzan, de forma prioritaria y casi exclusiva, a los líderes sindicales, abogados de los campesinos y agentes religiosos vinculados más particularmente a la pastoral de la tierra (CPT) y al Partido de los Trabajadores (PT). Ejemplos claros y más destacados de lo anterior son los casos de asesinatos del cura Jósimo Tavares y del sindicalista Chico Mendes, presidente del PT del estado de Pará y líder ecológico conocido internacionalmente.

La impunidad de los crímenes en el campo es casi total, y continúa hasta nuestros días. No hay voluntad política por parte del gobierno para aplicar la justicia, ni tampoco para investigar a los instigadores y ejecutores de los crímenes. Indudablemente existe una connivencia generalizada del aparato del Estado, así como una fuerte presión de algunos sectores de la sociedad civil, que directa o indirectamente están involucrados. Me refiero particularmente a los grandes grupos económicos que, por su capacidad de influencia en diferentes esferas de la vida sociopolítica nacional, necesitan garantizar sus intereses de clase en estas áreas, y protegerse de las amenazas que representan la lucha y resistencia campesinas.

El norte del país continúa siendo la región más violenta en la lucha por la tierra. Las regiones de la Amazonia, en particular, el estado de Pará, son áreas de frontera agropecuaria y de expansión del gran capital. Ahora bien, a partir de la aprobación de la nueva carta constitucional, en la cual se garantizan los privilegios de la burguesía agraria, el conflicto se recrudece y se generaliza en todo el país, incluso en las zonas de mayor desarrollo capitalista localizadas en el sureste y sur del país.

El carácter paramilitar y organizado del crimen en el campo constituye, innegablemente, uno de los aspectos más graves del conflicto por la tierra en Brasil. Es por demás sabido y bastante divulgado, el involucramiento de elementos de las policías militar y civil en la práctica de la violencia, que forman verdaderas *milicias* al mando de los grandes propietarios de tierras. El crimen organizado se extendió considerablemente en el gobierno de Sarney, y asume efectivamente un carácter de clase. En este sentido podemos señalar el surgimiento, a partir de 1985, de la *União Democrática Ruralista* (UDR) comandada por grandes latifundistas y líderes empresariales rurales, con el objetivo claro y explícito de impedir cualquier intento de reforma agraria en el país. No obstante la dificultad de probar el carácter militarizado, el uso de armas y el involucramiento directo de la UDR en muchos asesinatos, se tienen ya suficientes indicios para incriminar a muchos elementos vinculados a dicha entidad. Ejemplos de esto son las declaraciones públicas en el periódico *O Germinal*, en Goiania, en abril de 1987, del líder de la UDR Salvador Farina, en el sentido de que ésta tiene en sus manos alrededor de 70 mil armas, así como las denuncias de contrabando de armas de la Argentina por parte de latifundistas vinculados a la UDR, (*Jornal do Brasil* 9/09/86 y 10/10/86).

La UDR se funda básicamente, con el objetivo de frenar el avance de la organización campesina y por la necesidad de impedir la aprobación y ejecución del primer Plan Nacional de reforma agraria propuesto por el gobierno de Sarney.

Con el objetivo de controlar e impedir el proceso de redistribución de las tierras en el país, la UDR se expande rápidamente en los diferentes estados de la federación, contando actualmente con más de 400 mil socios en todo el país. Además de organizar a la burguesía agraria, la UDR pretende constituirse en un actor relevante en el escenario político nacional, sustentando como propuestas la defensa intransigente del derecho de propiedad —en especial de la tierra—, la libre iniciativa y, fundamentalmente, la privatización del Estado.

A partir de 1986 el Congreso Nacional, con funciones constituyentes, pasa a ser el centro de atención de la sociedad brasileña. La burguesía agraria, organizada y coordinada por la UDR, toma a la Asamblea Constituyente como la instancia privilegiada de su acción y proselitismo político, ya que en ella estaban siendo decididas las grandes cuestiones nacionales, entre las cuales, la estructura de la propiedad de la tierra.

Así pues, además de organizar a la clase mediante el uso de un nuevo estilo de asociación que abandona los patrones tradicionales, amplía rápidamente sus redes de penetración y vínculos políticos con autoridades del aparato del Estado, parlamentarios y políticos de diversas regiones del país. En ese

⁴ Al respecto, para mayores detalles, *cf.*, el documento *A ofensiva da direita no campo*, 1988. (IBASE, ABRA, CPT, CNRA, INESC Y CONTAC).

sentido se crean vínculos y alianzas que van desde los de orden ideológico-partidario, pasando por los de apoyo económico financiero en campañas electorales, hasta lazos de verdadera militancia, por medio de los cuales estas personas se constituyen en miembros políticos y orgánicos de la entidad.

El proceso constituyente resultó extremadamente favorable a la UDR y a los diversos intereses del capital en la agricultura, ya que contó con el 100% de los votos del Partido Democrático Cristiano (PDC), el 89.5% de los votos del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), el 88.5% del Partido del Frente Liberal (PFL), el 83.8% del Partido Democrático Social (PDS), el 37.8% del Partido del Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) y con el 11.5% del Partido Democrático de los trabajadores (PDT), consiguiendo bloquear el proyecto de reforma agraria, con lo cual se verifica, incluso, un retroceso con relación al *Estatuto da Terra* propuesto por los militares en 1964.

Este proceso representó la victoria de la burguesía en su conjunto, unida en función de sus grandes intereses en la agricultura, así como la victoria de las diversas fracciones del capital, que por estar económicamente integradas a la burguesía agraria, llevan a cabo la unidad burguesa en el campo político.

En la Constituyente la burguesía demostró, decidida y unitariamente, que no quiere la realización de la reforma agraria en Brasil; al mismo tiempo este hecho, anunció la acción conjunta de las diferentes fracciones burguesas a la hora de las elecciones para presidente de la República en 1989, cuando se elige al conservador Fernando Collor de Mello.

La victoria del proyecto neoliberal en Brasil, representada por la elección de Fernando Collor de Mello, con apoyo político y económico, amplio y explícito de la UDR y de las varias fracciones burguesas, representó, fundamentalmente para los sectores agrarios, la victoria del capital sobre el trabajo, así como la garantía de manutención de la actual estructura agraria y de los actuales intereses y privilegios de los poderosos en la agricultura.

La consolidación del proyecto neoliberal en Brasil y de forma especial, en su agricultura, nos apuntará posiblemente para los siguientes escenarios:

a) Dado el mantenimiento del actual modelo ex-

portador, en el cual el sector agropecuario moderno desempeña un importante papel, se incentivará prioritariamente la producción agropecuaria vinculada a la exportación y al capital agroindustrial. La producción de alimentos básicos, se quedará como en el gobierno de Sarney y en los gobiernos militares, al margen del proceso, acelerando de esta forma, además del proceso inflacionario, la descapitalización y expropiación de las pequeñas unidades productivas, lo que incrementará, por cierto, la desocupación y el éxodo rural.

b) La realización del proyecto neoliberal en la agricultura se manifestará posiblemente en el aumento de la concentración de la propiedad de la tierra, principalmente en manos del gran capital financiero-industrial, nacional y extranjero, en el cual la agricultura se incorporará, de forma acentuada, al proceso de integración e internacionalización del capital.

c) Se verificará el recrudescimiento del conflicto por la tierra, dado que, por un lado, está la burguesía agraria cada vez más militarizada y protegida por el Estado, y por el otro, el contingente enorme y creciente de trabajadores *sem terra* que de forma cada vez más organizada en sus sindicatos, movimientos y partidos políticos, luchan y defienden sus legítimos derechos al trabajo y al acceso a la tierra.⁵

d) Por parte del Estado, además del uso de forma creciente de sus aparatos represivos, se podrá verificar el estrechamiento de sus alianzas con los sectores del gran capital, productivo o especulativo en la agricultura, asumiendo de forma cada vez más clara su carácter de clase.

El proyecto de una profunda reforma agraria en Brasil —respaldado por más de 31 millones de personas en las elecciones de 89—, no obstante descartado por los varios gobiernos desde el golpe de 1964 y por las actuales fuerzas dominantes, pasa a ser una necesidad política y socialmente impostergable.

⁵ El movimiento de los trabajadores *sem terra* es el que presenta mayor grado de articulación interna entre los movimientos de lucha por la tierra en Brasil y se presenta más estructurado en los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur. *Cfr.*, para mayores detalles Grzybowski, Cândido, *Caminhos e Descaminhos dos Movimentos Sociais no Campo*, Vozes, Rio de Janeiro, 1987.